

RESEÑAS

SECTOR AGROPECUARIO, DESARROLLO Y POSTCONFLICTO EN COLOMBIA

El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia

Carlos Gustavo Cano S., Ana María Iregui B.,
María Teresa Ramírez G., y Ana María Tribin U. (editores)
Bogotá: Banco de la República, 2016, 603 pp.

Uno de los rasgos más relevantes que caracterizan al sector agropecuario es su fuerte interacción y dinámica con el sector urbano y la importante sinergia que desempeña en el desarrollo del sector no agrícola. De la agricultura procede la mano de obra que va a trabajar al sector industrial y la oferta de alimentos que permite a la población trabajadora no agrícola sobrevivir. Estos dos flujos fundamentales se constituyen como un factor de desarrollo y como un foco de transformación estructural que están acometiendo la mayoría de economías en desarrollo.

El Nobel en Economía Arthur Lewis, hace por lo menos unos 64 años atrás, esbozó una teoría del desarrollo más conocida como el “modelo de desarrollo dual”, en donde se destaca la coexistencia de lo “tradicional” y lo “moderno” para referirse al sector agrícola e industrial, respectivamente. En dicho modelo de desarrollo, el trabajo excedentario y el tipo de organización económica son los

protagonistas esenciales de la acumulación industrial y el desarrollo económico, lo que sin duda se convierte en una estrategia ideal para economías como la colombiana.

En la actualidad, el sector agropecuario colombiano es foco de atención por parte de los hacedores de política económica para diseñar una estrategia de desarrollo rural en un escenario ideal de postconflicto. En este sentido, el deber ser del desarrollo del sector debería contemplar un enfoque integral y participativo, donde se diseñen políticas inclusivas que afecten positivamente a la población rural colombiana. Además, la promoción del desarrollo rural debe ser sostenible, satisfacer la creciente demanda de necesidades básicas, y debe ayudar a superar la desigualdad que se presenta en las zonas más apartadas del país y cuya orientación productiva es el sector agropecuario. En otras palabras, una de las estrategias de desarrollo rural debe estar orientada a erradicar la creciente pobreza y desigualdad que se percibe en el campo colombiano y garantizar un crecimiento sostenido del sector que estimule la creación empresarial y que organice las cadenas productivas con orientación hacia los mercados internacionales, idealmente.

Las políticas de desarrollo deben propender por una provisión de bienes públicos plasmados en programas de innovación e investigación, infraestructura y el establecimiento de reglas claras sobre derechos de propiedad y una coordinación de política macroeconómica encaminada a generar un clima propicio que estimule el desarrollo rural. Por consiguiente, la estrategia de desarrollo en un escenario de postconflicto debería encaminarse a solventar las restricciones que lo impiden. Una forma de hacerlo es mediante el diseño de medidas diferentes a las asistencialistas, materializadas en el otorgamiento de subsidios que podrían generar incentivos perversos y distorsiones en las decisiones de inversión en el campo.

La publicación del libro *El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia* es, entonces, oportuna y necesaria, toda vez que recoge los elementos anteriormente esbozados y realiza diagnósticos completos relacionados con la economía agrícola del sector rural en diferentes aspectos como la situación social de la población rural relacionada con la pobreza, desigualdad y violencia; la productividad y la innovación; la microestructura institucional y la asociación de los pequeños productores; y los temas relacionados con el financiamiento de las actividades agropecuarias ligado a la política de competencia en el sector agropecuario.

En la actualidad existe conceso entre los economistas, tanto de los diseñadores de política como de los académicos, en que uno de los principales obstáculos para

alcanzar el desarrollo del sector es la creciente desigualdad y los altos niveles de pobreza en el campo. Si bien la situación de pobreza en general ha disminuido, la situación de pobreza relativa campo-ciudad es alarmante, al igual que el tema de la desigualdad. En efecto, las últimas cifras oficiales reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2016, muestran que la pobreza multidimensional y monetaria en los centros poblados y zonas rurales fue de 37,6% y 38,6%, respectivamente. En torno a la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini, según la misma fuente, la distribución del ingreso en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 0,454 en 2015 a 0,458 en 2016, lo que refleja un aumento en la desigualdad.

Otra gran restricción que enfrenta el sector rural es la relacionada con los bajos niveles de investigación y desarrollo, que se manifiestan en una precaria productividad, con excepción de unos pocos productos que presentan fortalezas institucionales y tradición en el sector. Así mismo, existe una infraestructura deficiente que hace que los costos para penetrar a los mercados internacionales sean demasiado altos, lo cual se manifiesta en una baja competitividad a nivel internacional. La combinación entre una baja productividad e innovación y la precaria infraestructura, deteriora la rentabilidad de las actividades en el sector, lo cual podría afectar la demanda de sus recursos financieros, ya de por sí escasos.

El libro, editado por Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, Ana María Iregui, María Teresa Ramírez, y Ana María Tribín, investigadoras de una de las unidades de la Gerencia Técnica del Banco de la República, se divide en cuatro partes: 1) el aspecto social en el campo; 2) la tecnología y la innovación; 3) un aspecto de organización y posicionamiento de pequeños productores; y 4) una parte relacionada con el derecho económico, que contempla temas como el de las estrategias de financiación y el efecto de las políticas de competencia en el sector rural.

En la primera parte, Ricardo Argüello y Paola Poveda, profesor y joven investigadora de la universidad del Rosario, respectivamente, describen la situación y la evolución a través del tiempo de la diversificación de los ingresos de los hogares rurales en Colombia entre 1993 y 2013. Los autores encuentran patrones distintivos en la diversificación del ingreso a través de diversos tipos de hogares y regiones, con una marcada inercia de los hogares en su comportamiento. Posteriormente, en el artículo de Jaime Forero, Claudia Rodríguez, Álvaro Gutierrez-Malaxechebarria y Amalia Nieto, todos pertenecientes al Grupo Sistemas de Producción y Conservación de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad

Javeriana, se trata de responder a dos preguntas básicamente: la primera es si la agricultura familiar es económicamente eficiente y qué tanto lo es frente a la agricultura empresarial de mediana y gran escala. La segunda pregunta es si la agricultura familiar tiene potencialidades para superar la pobreza de los hogares. El artículo concluye, entre otras cosas, que los agricultores familiares son eficientes, dado que el trabajo empleado en sus sistemas de producción es remunerado muy por encima de sus costos de producción.

El trabajo elaborado por Ana María Iregui, María Teresa Ramírez y Ana María Tribín, tiene como objetivo examinar si la generación de ingresos laborales por parte de las mujeres afecta la violencia contra ellas; además de contribuir a la literatura económica al elaborar un análisis a nivel de sectores económicos y considerar las mujeres que residen en la zona rural. Los resultados derivados de la estimación econométrica de los determinantes de la violencia doméstica contra las mujeres muestran que una mayor generación de ingresos por parte de las mujeres rurales en la mayoría de los sectores contribuye a reducir la violencia doméstica, mientras que en pocos sectores sucede lo contrario debido a que son actividades que no empoderan a la mujer y están subvalorados.

El último artículo de la primera sección, escrito por Fabio Sánchez y Marta Juanita Villaveces, profesores de las Universidades de los Andes y del Rosario, busca hacer un aporte al vacío en los determinantes demográficos y de la extensión de la frontera agrícola en la política de adjudicación de baldíos a lo largo del siglo xx, y hace énfasis en factores como el crecimiento poblacional, la distancia a los mercados, la distancia en la frontera definida en la Ley 2 de 1959 y el acceso a la tierra en el pasado. Las principales conclusiones del artículo muestran que en términos históricos se observa la importancia de la legislación, que incrementó significativamente la tenencia en número y área de adjudicación de baldíos en todo el territorio colombiano. Así mismo, mediante la estimación de un modelo econométrico se encuentra que la dinámica de crecimiento poblacional, la distancia a las carreteras principales, la existencia de colonato en 1960 y la prevalencia de conflictos agrarios antes de 1950 se encuentran relacionados positivamente con la adjudicación de baldíos.

En la segunda parte del libro, Juan Ramírez, Juan Perfetti (investigadores de Fedesarrollo) y Juan Bedoya (estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid), estiman a partir de un modelo econométrico las brechas tecnológicas (y los factores que las explican) en la producción que realizan pequeños y medianos productores en Colombia. Los autores concluyen que existe un considerable nivel de ineficien-

cia técnica en la producción agropecuaria en Colombia en un rango comprendido entre 41% y 61% con respecto a la frontera en la producción agrícola. Posteriormente, Ligia Melo-Becerra y Antonio Orozco-Gallo, ambos investigadores del Banco de la República, estudian la eficiencia del sector agropecuario considerando la presencia de diferentes sistemas productivos a partir de la información del módulo rural de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) producida por el DANE en 2011. Mediante la estimación econométrica de fronteras de producción, encuentran que las medidas de eficiencia alcanzan en promedio 56%, la eficiencia con respecto a la metafrontera del sector 46%, y estiman una brecha tecnológica del orden de 82%. Al mismo tiempo, concluyen que los hogares ubicados en municipios con alturas superiores a 1.900 msnm, registran en promedio una eficiencia técnica más alta.

El artículo de Daniela Zuluaga, quien es asistente de investigación en la Universidad de los Andes, tiene el propósito de contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo rural y agrícola con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el sector. Para tal fin, identifica la situación productiva de las mujeres rurales en cuatro regiones importantes de Colombia y evalúa las posibles brechas de productividad entre hombres y mujeres mediante un análisis cuantitativo a partir de la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) de la Universidad de los Andes. El trabajo concluye que en los hogares en los que el agricultor principal es una mujer, la productividad agrícola se reduce 30% en comparación con los hogares cuyo agricultor principal es el hombre. De igual forma, el nivel de comercialización, el uso de fertilizantes, la asistencia técnica, entre otros, explican indirectamente las diferencias en productividades entre hombres y mujeres. Por su parte, el trabajo de Ignacio Lozano y Juan Restrepo tiene como objetivo analizar la provisión de bienes públicos de infraestructura y evaluar sus posibles efectos sobre el rendimiento y las áreas sembradas de los principales cultivos en diferentes regiones del país. Mediante la técnica estadística de emparejamiento *Propensity Score Matching* (PSM) se encontró que el efecto de los distritos de riego y drenaje mejora la productividad del sector rural, especialmente en productos como arroz, tomate, trigo y palma de aceite.

En la última parte de esta sección está el trabajo de Davinson Abril, Luis Fernando Melo y Daniel Parra, que tiene como objetivo analizar el efecto del clima, en particular de los fenómenos de El Niño y de La Niña, sobre la inflación. Los autores encuentran que después de presentarse una gran alteración del clima, la inflación de alimentos reacciona significativamente, y su respuesta es asimétrica dependiendo del signo y la magnitud del choque climático.

En la tercera parte del libro, Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister y Carlos Robayo, presentan algunas conclusiones y recomendaciones de la “misión de estudios para la competitividad de la caficultura en Colombia”. Los autores destacan 10 mensajes centrales de la Misión, dentro de los cuales sobresale que el café continúa representando una opción de vida importante de millones de colombianos, la caficultura rentable contribuye a la reducción de la pobreza, una caficultura rentable y heterogénea requiere de una reforma institucional que promueva la competitividad, entre otras. A continuación se encuentra el artículo de Juan Nicolás Hernández y Miguel Ignacio Gómez, estudiante y profesor de la Universidad de Cornell, enfocado en la participación de los pequeños productores en los mercados de cafés especiales según un modelo denominado Relación Directa de Café (RDC). Los autores destacan que, si bien la caficultura en Colombia ha perdido participación en el PIB, continúa siendo una labor intensiva en mano de obra y representa una de las principales fuentes económicas para pequeños productores y sus familias.

A continuación, Nubia Bayona, Natalia Robledo y Juan Patricio Molina, estudian el caso específico de las asociaciones de productores campesinos en el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria (PMASAB) e identifican los desafíos y limitantes en las organizaciones de productores dentro de los cuales sobresalen factores económicos, financieros, territoriales, políticos y asociativos. Los autores concluyen que las organizaciones de campesinos han sido pensadas como un eje transversal de las políticas para el desarrollo rural, de manera tal que las instituciones que las promueven esperan que estas les brinden a las comunidades productoras de alimentos mayor capacidad de negociación, eficiencia y acceso a recursos. El trabajo de Javier Pérez-Burgos y Nicolás de Francisco realiza un diagnóstico de la cadena de suministros de fertilizantes en Colombia para analizar los aspectos relevantes en la formulación de una política que permita atender las necesidades de las comunidades más afectadas con la fluctuación en los costos de producción agrícola. En el trabajo se concluye que la deficiente infraestructura del país se percibe como un determinante significativo para la elevada estructura de costos de los insumos agropecuarios y la falta de alternativas de distribución es reconocida como una barrera que impide mejorar la competitividad del sector.

En la cuarta y última parte del libro, el trabajo de Rafael Parra-Peña, Barry Reilly y Mark Lundy, estudia el efecto de la violencia sobre la duración de los agrogocios de los pequeños agricultores en Colombia. Mediante la estimación econométrica de modelos de supervivencia encuentran que la presencia de violencia

al momento de crearse un agronegocio hace más probable la interrupción de los Acuerdos Comerciales agrícolas (AC). En otras palabras, se obtiene evidencia de que el conflicto armado ha tenido un efecto degradante sobre los agronegocios, ya que dificulta la capacidad de los agricultores para mantener vínculos con los mercados.

Por su parte, el trabajo de Juan Carlos Caro ofrece un modelo teórico-práctico y su aplicación empírica respecto de la probabilidad esperada por los agricultores de operar bajo la modalidad de contrato, como una función de sus capacidades técnicas y comerciales. El autor, quien hace parte del *Carolina Population Center*, concluye que las explotaciones agrícolas son muy heterogéneas y que tener educación superior, un régimen tributario y participar en una cooperativa son prácticas que elevan la probabilidad de participación en contratos. A continuación, Francisco Gutiérrez Sanín y Margarita Marín, pertenecientes a las Universidad Nacional y Sergio Arboleda respectivamente, analizan en su artículo las variables asociadas a la concesión de créditos agrarios en Colombia y toma como referente el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y el que lo sucedió, Desarrollo Rural con Equidad (DRE). El objetivo de los autores es explicar la distribución diferencial en el otorgamiento de créditos y evaluar los cambios del DRE con respecto al AIS. Para ello, evalúan cinco hipótesis y concluyen que de estas, la gran ganadora es la relacionada con la importancia de realizar una evaluación más amplia y sistemática de las políticas de crédito, así como diseñar mecanismos que permitan su formulación, aprobación e implementación. De igual forma, el trabajo ofrece evidencia empírica a través de la estimación econométrica de la probabilidad condicionada de asignación de créditos controlando por variables geográficas, económicas y sociales. Gutiérrez y Marín encuentran que la concesión de créditos al sector palmicultor, la población, el desplazamiento, las masacres, las titulaciones de baldíos, entre otras, aumentan la probabilidad de asignar créditos bajo el programa AIS.

El trabajo de Dairo Estrada (Banco de la República), Santiago Tobón (estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes) y Paula Zuleta (Finagro) busca analizar el incentivo que la inversión forzosa tiene sobre la colocación de créditos al sector rural, especialmente a los pequeños productores agropecuarios, quienes no acceden a este tipo de instrumento. Los autores concluyen que se deben aumentar los valores de la ponderación de cartera sustitutiva para incentivar la oferta de crédito agropecuario y microcrédito. Por último, el trabajo de Juan David Gutiérrez estudia los casos decididos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el periodo 1994 - 2015 en los eslabones de las cadenas

agropecuarias y realiza un balance sobre el tipo de conductas anticompetitivas que se han presentado en las cadenas de valor. Una de las principales conclusiones del estudio es la existencia de situaciones de sincronía entre el gobierno nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) y la autoridad de competencia, y la existencia de casos en los cuales existe tensión entre las políticas sectoriales y la aplicación de la legislación sobre la libre competencia.

Como se observa, el libro *El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia* logra compilar excelentes artículos relacionados con diversos aspectos relacionados con el sector agrícola en Colombia: la pobreza, la desigualdad, el desarrollo, la eficiencia, la competencia, entre otros. Su valor agregado radica precisamente en contribuir al entendimiento de los problemas que aquejan al sector rural y a estimular un sano debate en torno al devenir del desarrollo rural y global del país. Todos esos temas tratados en los distintos artículos permiten entender las restricciones y cuellos de botella que dificultan el desarrollo sostenible del sector, que podría ser el líder facilitador de los procesos de desarrollo económico y social del país.

ÁLVARO HERNANDO CHAVES CASTRO
Escuela Colombiana de Ingeniería